

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

| APELACIÓN - SENTENCIA | |
|-----------------------|---|
| DEMANDANTE | JORGE WILLIAM GUERRA MONTOYA |
| DEMANDADOS | COLPENSIONES |
| RADICADO | 05001-31-05-014-2019-00153-01 |
| MAGISTRADA PONENTE | MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO |
| TEMA | Pensión de vejez – compatibilidad pensional |
| DECISIÓN | Modifica - Confirma |

Medellín, cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor

JORGE WILLIAM GUERRA MONTOYA contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 029**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de **COLPENSIONES** contra la sentencia que profirió el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 30 de julio de 2020.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor GUERRA MONTOYA el día 28 de octubre de 2016 solicitó ante Colpensiones reconocimiento de pensión de vejez bajo el radicado 2016_12730822, toda vez que tenía en su haber una densidad de más de 1.300 semanas y 62 años de edad.

Que el demandante nació el 26 de octubre de 1954, razón por la que cumplió los 62 años el mismo día y mes de 2016, por lo que reúne requisitos establecidos en la ley 100 de 1993.

El señor GUERRA MONTOYA cuenta con pensión gracia derivada de tiempos públicos al servicio del Departamento de Antioquia causada desde la edad de 50 años, reconocida por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL, hoy UGPP, y además, cotizó un total de 1.540 semanas al régimen de prima media.

Que los tiempos privados nunca se tuvieron en cuenta para reconocer la pensión gracia que viene devengando el actor, máxime que las asignaciones que paga COLPENSIONES no son provenientes del tesoro público, toda vez que esa entidad solo actúa como administrador de recursos que aportan trabajadores y empleadores.

Que la prohibición de doble asignación contemplada en el literal J del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, no aplica al presente asunto, resultando compatible la pensión de jubilación que paga CAJANAL con la pensión de vejez reclamada ante COLPENSIONES, tornándose la negativa pensional de esta última entidad en injustificada.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que, se declare que al señor JORGE WILLIAM GUERRA MONTOYA le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y se condene a COLPENSIONES a pagar la referida pensión; mesadas adicionales; al pago de intereses moratorios el art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación; costas y agencias en derecho.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo la accionada a dar respuesta a la misma por intermedio de apoderado judicial (folios 71 y ss. del expediente digital).

COLPENSIONES, allegó contestación a la demanda, visible a folios 71 a 74 del expediente digital. A través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; aceptó los hechos referentes a la solicitud de prestación radicada ante Colpensiones, la respuesta negativa de la entidad, la fecha de nacimiento del actor, el cúmulo de semanas cotizadas y la prestación que le fue otorgada por parte de Cajanal Hoy UGPP; pero indica que los demás no son hechos a los que se deba dar respuesta. Propuso en su defensa las excepciones

de mérito que denominó: *“Inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, imposibilidad de condena en costas, prescripción y excepción innominada”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

En audiencia pública celebrada el 06 de agosto de 2020, el Juez de conocimiento en primera instancia condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor JORGE WILLIAM GUERRA MONTOYA la pensión de vejez en los términos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003; un retroactivo pensional por el valor de **\$198.383.053**, liquidado desde el 01 de noviembre de 2016 hasta el 31 de julio de 2020; a continuar reconociendo desde el 01 de agosto de 2020 una mesada pensional por la suma de **\$4.325.082**, sin perjuicio de los incrementos de ley y la mesada adicional de diciembre; a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 29 de febrero de 2017 (sic) y hasta que se verifique el pago de lo adeudado; autorizó a COLPENSIONES a descontar del retroactivo, el porcentaje para los aportes al sistema de seguridad social en salud; condenó en costas a COLPENSIONES, fijando agencias en derecho por la suma de \$13.886.000.

Fundamentó su decisión indicando que, para decidir la presente pretensión, debe observarse lo dispuesto en el art. 279 de la ley 100 de 1993, que estableció las excepciones del estatuto de seguridad social integral, en el aparte que establece que “se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989”, y a su vez el art. 31 del Decreto 692 de 1994.

Que en el caso concreto, se evidencia que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional Antioquia, mediante resolución 35119 del 07 de marzo de 2005 le reconoció al actor una pensión de jubilación a partir del 27 de octubre de 2004 con cuantía inicial \$1.251.611, pagada por la fiduciaria la Previsora S.A. por haber prestado servicios como docente nacionalizado entre el 14 de julio de 1974 y 26 de octubre de 2004, y también disfruta de una pensión gracia por parte de Cajanal en Res. 007233 del 13 de febrero de 2006, a partir del 26 de octubre de 2004 en cuantía mensual de \$1.240.592, teniéndose en

cuenta el tiempo en que laboró como docente en el Departamento de Antioquia desde 16 de julio de 1974 hasta el 30 de octubre de 2004; además, en historia laboral del ISS hoy Colpensiones, los aportes se efectuaron como trabajador independiente y trabajador de carácter privado, acumulando una densidad de 1.645,98 semanas, que sumados los periodos de septiembre y octubre de 2016, mismos que se encontraron pagados y aplicados, se acumula un gran total de 1.650 semanas.

Dijo que este tema ha sido objeto de estudio por la Corte Suprema de Justicia, como la sentencia SL-451 de 2013, donde se avaló la posibilidad de recibir válidamente una pensión de carácter oficial y una de carácter privada, al existir compatibilidad entre ambas prestaciones, siendo posible consolidar ese derecho pensional autónomo e independiente.

En cuanto a la prohibición establecida en el art. 128 de la C.N., estimó el fallador de instancia, que la misma ha sido decantada por la jurisprudencia de la Corte, donde se ha expuesto que la pensión a cargo Colpensiones no está financiada con el erario público, pues esta entidad solo actúa como mera administradora de los aportes de sus afiliados y no es dable estimar que el fondo común sea del tesoro público, además que si bien los aportes vienen de una entidad pública, constituyen un patrimonio parafiscal por estar destinados exclusivamente para engrosar el fondo común para el pago de pensiones, y esos dineros dejan de ser del erario al ser trasladados a la entidad de seguridad social, adicionalmente, parte de esos aportes, sales del patrimonio de los trabajadores.

Consideró el juez de primer grado que en el caso particular, el demandante, al obtener la pensiones provenientes del Magisterio y la pensión gracias por sus servicios prestados como docente nacionalizado y docente del Departamento, no se le tuvo en cuenta los aportes realizados como independiente y con empleadores particulares, además de que en el caso en que se hubiesen migrado algún tipo de aportes de naturaleza pública, esos aportes que ingresan al fondo común administrado por COLPENSIONES, como ya se indicó, corresponden a aportes parafiscales que hacen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, y no tienen la categoría de recursos públicos.

Que al demandante se le debe aplicar la Ley 797 de 2003, toda vez que nació el 26 de octubre de 1954, y cumplió 62 años el año 2016, y en cuanto a la densidad de cotizaciones, este tiene 1645 semanas, y se deben sumar los ciclos de septiembre y octubre de 2016, que aparecen aplicados al periodo declarado, dejando un total de 1650 semanas, contando con el lleno de requisitos para acceder a la pensión que reclama.

Estableció el disfrute, precisando que la desafiliación ocurrió en el mes de octubre de 2016, por lo que la prestación debe reconocerse a partir del 01 de noviembre de 2016 y liquidado el IBL conforme el artículo 21 de la ley 100 de 1993, se tuvo como el más beneficioso obtenido del promedio de los últimos 10 años por la suma de \$5.072.870, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 72,32%, quedando una mesada pensional de \$3.668.699 para el año 2016. Indicó que no operó el fenómeno de la prescripción por cuanto no transcurrió el término trienal.

Y a título de retroactivo pensional liquidó la suma de \$198.383.053, y dispuso el pago de una mesada para el año 2020, en cuantía mensual de \$4.325.082; sobre el retroactivo adeudado se ordenó el pago de intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1994, los cuales deberán ser liquidados por la entidad a partir del 29 de febrero de 2017 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago; no accedió a la pretensión de indexación por ser incompatible con la condena a los intereses.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por COLPENSIONES, quien insiste a través de su apoderado judicial en la tesis de la incompatibilidad entre la pensión de vejez a cargo de Colpensiones, y la pensión de jubilación otorgada por el fondo de prestaciones sociales del magisterio, precisando para ello, que la Ley 100 de 1993 prohíbe expresamente el pago de una doble mesada pensional cuando se está cubriendo la misma contingencia.

Expone también la recurrente, que para que la pensión de vejez fuera compatible, la de jubilación debió haberse causado con anterioridad al 17 de mayo de 1992. Motivos por los cuales solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En la debida oportunidad procesal, y por parte del señor JORGE WILLIAM GUERRA MONTOYA, la apoderada judicial indica que efectivamente el demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez, ajustándose a los argumentos del juez de primer grado.

COLPENSIONES, por intermedio de apoderada judicial, Dra. Maria Carolina Jurado Arango, portadora de la T.P. 307.847 del C.S. de la J., sustituta de la sociedad Palacio Consultores S.A.S., y a quien el despacho le reconoce personería para actuar conforme sustitución allegada al expediente digital, presentó alegatos de conclusión indicando que conforme la ley 4 de 1992, solo hay compatibilidad de las pensiones del Magisterio y del Sistema General de pensiones cuando se trate de docentes que hubieren adquirido el estatus de pensionado antes del 18 de mayo de 1992, y en este caso, el demandante obtuvo ese estatus con posterioridad a esa fecha, ello conforme las resoluciones N° 35119 del 07 de marzo de 2005 del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Regional Antioquia, y N° 007233 del 13 de febrero de 2006, emitida por Cajanal, lo que quiere decir que conforme la norma antes citada, estas prestaciones no son compatibles con la que se pretende en este asunto. Solicita entonces que se revoque la sentencia de primera instancia.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez

competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. - Pensión de vejez - Compatibilidad pensional. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, sobre los que recae la competencia de la Sala, y el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES en todo lo desfavorable para dicha entidad conforme lo señalado en el art. 69 del CPTSS, los problemas jurídicos estriban en dilucidar, si el demandante JORGE WILLIAM GUERRA MONTOYA reúne o no los requisitos legales para acceder a una pensión de vejez en los términos del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9º de la Ley 797 de 2003, o si por el contrario esta prestación resulta incompatible con la pensión de jubilación que percibe por parte del fondo de prestaciones del magisterio y la pensión gracia que recibe por parte de Cajanal.

En segundo lugar, y solo en caso de prosperar la pretensión principal, se analizará bajo el grado jurisdiccional de consulta, la fecha de disfrute pensional, el valor de la mesada y su retroactivo, así como la procedencia de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, o en su defecto la indexación de las condenas.

Para resolver la problemática planteada, necesariamente deberá la Sala partir aquellos hechos probados e indiscutidos en el proceso:

- Que el demandante nació el día 26 de octubre de 1954 según consta en la copia del registro civil de nacimiento visible a folios 12 plenario, por lo que cumplió la edad pensional de 62 años para los hombres, el mismo día y mes del año 2016.
- Que según la HISTORIA LABORAL más actualizada aportada por COLPENSIONES (fls.99 – 118), el señor GUERRA MONTOYA registra un total de 1.645,98 semanas hasta el 31 de octubre de 2016, y con la adición de los periodos de septiembre y octubre de 2016, que efectivamente

fueron cotizados y no tenidos en cuenta por la entidad, el conteo de semanas sería de 1.654,55.

- Que el demandante reclamó ante COLPENSIONES el reconocimiento y pago de una pensión de vejez el día 28 de octubre de 2016, misma que le fue negada a través de la resolución GNR 354773 del 24 de noviembre de 2016 (fls.15-20), indicándose en el citado acto administrativo, que a pesar de contar el actor con los requisitos de edad y semanas cotizadas previstos en el art. 9º de la ley 797 de 2003, el hecho de encontrarse percibiendo una pensión de jubilación por parte del magisterio - Secretaria de Educación de Medellín, hace incompatible la pensión de vejez reclamada, pues la de jubilación se causo con posterioridad a la ley 4ª de 1992, y dicha normativa en su art. 19 prohíbe una doble asignación proveniente del tesoro público, lo resuelto en este sentido fue confirmado luego, en las resoluciones N° GNR 378803 del 13 de diciembre de 2016, y VPB 5563 del 10 de febrero de 2017 (fls.25 al 42), que desataron los recursos de reposición y apelación presentados por el demandante contra la primigenia resolución.
- Y finalmente está probado que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional Antioquia, reconoció pensión de jubilación al demandante mediante resolución 35119 del 07 de marzo de 2005 a partir del 27 de octubre de 2004 con cuantía inicial \$1.251.611, misma que sería pagada por la Fiduciaria la Previsora S.A., resolución que fuera aclarada con la N° 0884 del 20 de enero de 2006, que reliquidó la mesada pensional al valor de \$1.301.523 desde el 27 de enero de 2004, como se puede observar en documento que es prueba de ello y que obra en el expediente administrativo allegado por Colpensiones.
- También se acreditó que por parte de Cajanal se le reconoció pensión Gracia en Res. 007233 del 13 de febrero de 2006, y a partir del 26 de octubre de 2004 por \$1.240.592 (fls. 12-14).

Pensión de vejez.

La pensión de vejez ha sido definida por la Corte Constitucional como un “salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo”, y tratándose del régimen de prima media con prestación definida, la misma se causa al cumplimiento de dos requisitos, esto es, edad y semanas cotizadas, así lo dispone el art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9º de la Ley 797 de 2003, veamos:

“ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ.
<Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. <Ver Notas del Editor> Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año **hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. (...)**

CASO CONCRETO

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que el demandante JORGE WILLIAM GUERRA MONTTOYA, cumplió la edad pensional de 62 años hombres, el día 26 de octubre de 2016, la densidad mínima de cotizaciones que debía satisfacer era de 1.300 semanas cotizadas; no obstante, y según se desprende de la historia laboral obrante a folios 99 al 118 del expediente digital, el actor tiene en su haber 1.645,98 semanas hasta el día 31 de octubre de 2016, reuniendo con creces este requisito legal, y por ende debe colegirse que tiene causada una pensión de vejez bajo el actual régimen general de pensiones, a partir del 01 de noviembre de 2016, pues para ese momento confluyeron en el demandante, tanto los requisitos de causación (edad y semanas) como el de desafiliación al sistema general de pensiones conforme lo previsto en los arts. 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990, como bien lo coligió el juez de primer grado.

Y es que a juicio de la Sala en el sub lite no se configura la supuesta incompatibilidad pensional que alega COLPENSIONES desde la resolución GNR 354773 del 24 de noviembre de 2016.

Lo anterior, toda vez que la pensión de jubilación otorgada al demandante como docente nacionalizado, a través resolución 35119 del 07 de marzo de 2005 a partir del 27 de octubre de 2004, y la pensión gracia otorgada por parte de CAJANAL en Res. 007233 del 13 de febrero de 2006 como docente departamental, corresponden a prestaciones que se encuentran al margen del régimen general de pensiones, pues debe recordarse que las pensiones del magisterio hacen parte del régimen exceptuado conforme lo señala el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; dice la norma:

“ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

<Aparte subrayado condicionalmente EXEQUIBLE> Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.”

Véase entonces como la misma Ley 100 de 1993, preceptúa claramente que las pensiones de jubilación otorgadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, son compatibles con las demás pensiones y remuneraciones contenidas en el Sistema de Seguridad Social Integral – Ley 100 de 1993.

Por lo tanto, no tienen cabida alguna para esta Sala, los argumentos expuestos por la entidad accionada, pretendiendo desconocer el imperativo legal antes citado, y la abundante jurisprudencia que frente al tema de compatibilidad

pensional, tiene establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de las sentencias con radicación N° 30.437 del 1° de Febrero de 2011, 41.001 del 17 de Julio de 2013, SL-2655 de 2018 y la SL-1025 de 2019, en esta última se indicó frente al tema de la compatibilidad pensional, que la misma era factible en aquellos casos en que el docente se vinculó al servicio público educativo oficial con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en el presente caso, pues según consta a folios 12 a 14 del plenario, y la documentación que reposa en expediente administrativo, el señor JORGE WILLIAM GUERRA MONTOYA se vinculó como docente oficial a partir del 16 de julio de 1974, y por ello la normativa con la cual debe reconocerse su pensión de jubilación, seguía siendo la Ley 91 de 1989.

Así las cosas, y como lo explica la jurisprudencia de la Corte en la referidas providencias, la calidad de docente oficial al estar excluida del Sistema Integral de Seguridad Social, al compás de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, le permitió al demandante prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

Consulta a favor de COLPENSIONES.

Bajo el grado jurisdiccional de consulta que le asiste a COLPENSIONES, en aquellos aspectos desfavorables de la sentencia que no fueron objeto de apelación, la Sala analizará a cuánto asciende a mesada pensional y su retroactivo, así como la procedencia o no de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993.

Y para ello debe partirse de lo dispuesto en los arts. 21 y 34 de la ley 100 de 1993, que regulan lo relativo al ingreso base de liquidación y el monto de la pensión de vejez, en el actual régimen general de pensiones.

El juez de primer grado luego de calcular el IBL del actor con las dos opciones de liquidación previstas en el art. 21 de la Ley 100 de 1993, concluyó que aquel obtenido del promedio de lo cotizado en los últimos 10 años (\$5.072.870) era el más favorable, al cual aplicó una tasa de reemplazo, conforme la fórmula del art. 34 de la ley 100 de 1993, del 72,32%, dejando como resultado una mesada pensional para el año 2016 por el valor de \$3.668.699.

Para verificar lo anterior, esta Sala procedió a calcular nuevamente el IBL del actor, especialmente el IBL del promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, que fue la opción acogida por el a quo, encontrando que con este promedio un IBL de \$4.822.166, es decir, ligeramente inferior al calculado en la primera instancia, lo que implica una modificación en este sentido, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que favorece a COLPENSIONES.

En cuanto a la tasa de reemplazo aplicable, esta judicatura atendiendo a la fórmula establecida en el art. 34 de la Ley 100 de 1993, encontró un monto porcentual del 72,51%, y al ser superior a la hallada por el a quo, se mantendrá la tasa del **72,32%** pues la consulta en este sentido solo favorece a COLPENSIONES que al ser aplicada al IBL de \$4.822.166, la mesada pensional del actor, quedó en la suma de **\$3.487.390**, a partir del 01 de noviembre de 2016.

En consecuencia, una vez reliquidado el retroactivo pensional adeudado al actor, y actualizado hasta el 30 de abril de 2021, la suma a pagar es de **\$229.956.971.**

| AÑO | IPC | MESADA | # DE MESADAS | SUBTOTAL |
|------|-------|-----------------|--------------|-------------------|
| 2016 | 5,75% | \$ 3.487.390,00 | 3 | \$ 10.462.170,00 |
| 2017 | 4,09% | \$ 3.687.914,93 | 13 | \$ 47.942.894,03 |
| 2018 | 3,18% | \$ 3.838.750,65 | 13 | \$ 49.903.758,39 |
| 2019 | 3,80% | \$ 3.960.822,92 | 13 | \$ 51.490.697,91 |
| 2020 | 1,61% | \$ 4.111.334,19 | 13 | \$ 53.447.344,43 |
| 2021 | | \$ 4.177.526,67 | 4 | \$ 16.710.106,67 |
| | | | | \$ 229.956.971,42 |

Sin que hubiere operado prescripción de mesadas pensionales, pues el actor no dejó transcurrir el término trienal al que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, entre la fecha de causación de la primera mesada pensional, y la fecha de la reclamación administrativa, como tampoco entre esta fecha y la de presentación de la demanda.

Y a partir del 1º de mayo de 2021, COLPENSIONES deberá continuar pagando al actor una mesada pensional en cuantía mensual de **\$4.177.527**, sin perjuicio de los incrementos anuales que decrete el gobierno nacional, y teniendo en cuenta 13 mesadas anuales, conforme lo declarado en la primera instancia.

Para una mayor ilustración de los cálculos aritméticos realizado por la Sala, los mismos se ordenan incorporar a la sentencia para que hagan parte integral de la misma.

Intereses Moratorios.

Al respecto estima la Sala, que en el sub lite también está llamada a prosperar la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, dado que el motivo por el cual se negó la prestación económica a través de la resolución GNR 354773 del 24 de noviembre de 2016 (fls.15-20), fue arbitrario e injustificado, pues en este acto administrativo, COLPENSIONES al resolver la solicitud pensional del señor JORGE WILLIAM GUERRA MONTOYA, la niega aduciendo una supuesta incompatibilidad pensional, que no tiene ningún fundamento legal y jurisprudencial, y dado que ya ha transcurrido más de 4 meses desde la solicitud pensional, conforme lo previsto en el art. 9º de la Ley 797 de 2003, se entienden causados los referidos intereses, a partir del 01 de marzo de 2017, que es el primer día del quinto mes de efectuada la solicitud pensional como bien lo coligió el juez de primer grado, pues pese a que indicó que se causaban a partir del día 29 de ese mes, se tiene que en el año 2017 no hubo 29 de febrero, por lo que efectivamente el primer día del quinto mes, es en la fecha antes indicada, es decir, 01 de marzo de 2017, motivos por los cuales habrá e confirmarse lo resuelto en este sentido.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la desventura del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de COLPENSIONES, las costas procesales en esta instancia estarán a cargo de dicha entidad, y a favor del demandante, en atención a lo dispuesto en el numeral 1º del art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$908.526.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia de fecha 06 de agosto de 2020 proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto al valor de la mesada pensional y su retroactivo, para en su lugar, **DECLARAR** la mesada pensional que le corresponde al señor JORGE WILLIAM GUERRA MONTROYA, a partir del 01 de noviembre de 2016, es la suma de **\$3.487.390**, y el retroactivo causado entre esta fecha y el 30 de abril de 2021, asciende a la suma de **\$229.956.971**.

Y a partir del 1º de mayo de 2021, la entidad accionada deberá continuar pagando al actor una mesada pensional en cuantía mensual de **\$4.177.527**, y en razón de 13 mesadas al año, sin perjuicio de los incrementos que decrete el gobierno nacional, según lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de apelación y consulta de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor del demandante, como agencias en derecho se fija la suma de \$908.526.

CUARTO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, la devolución del proceso al juzgado de origen y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **098** del **8 de junio de 2021**.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>